IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor Juez de primera instancia del Juzgado número quince de Barcelona se expide el presente en cumplimiento de lo acordado en providencia de dieciséis de los corrientes, dictada en el expediente de suspensión de pagos de la Entidad «Merco, S. A.», dedicada a la venta al detall de tejidos y confección para señora, con establecimiento en la avenida del Generalísimo Franco, número quinientos seis, y se hace saber que dicha suspensión ha sido considerada en estado de insolvencia definitiva, y que para la celebración de la correspondiente Junta de acreedores para la aprobación, en su caso, del oportuno convenio se ha señalado el día cuatro de octubre próximo, a las dieciséis horas treinta minutos, en la Sala Audiencia de este Juzgado.

Barcelona, veinticuatro de agosto de mil novecientos sesenta y ocho.—El Secretario, Juan Rodríguez.—Visto bueno: El Juez, Eloy Mendaña.—8.192-C.

En el expediente de suspensión de pagos de la Sociedad «Acondicionamiento y Automatización del Clima, S. A.» (A. Y. A. C. S. A.), se ha dictado el siguiente:

«Auto.—Barcelona, diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y ocho.—El anterior escrito unase al expediente de su razón. Se tiene a los señores Interventores por evacuada la vista conferida; y

Resultando que por auto de veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y siete se declaró a la Sociedad «Acondicionamiento y Automatización del Clima, S. A.» (A. Y. A. C. S. A.), dedicada a la instalación, montaje y venta de aparatos de climatización doméstica, industrial y de vehículos de turismo, domiciliada en Barcelona, calle Berlín, número 13, en estado legal de suspensión de pagos, conceptuándose la como de insolvencia provisional; y se convocó a los acreedores de la misma a Junta general para el día veintidós de marzo siguiente en la Sala Audiencia de este Juzgado, mandándose citar a los acreedores y hacer pública la convocatoria mediante edictos, a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de esta provincia y en el «Diario de Barcelona de Avisos y Noticias»;

Resultando que mediante escrito de siete de marzo último, la representación de la suspensa, por exceder de doscientos el número de acreedores de la misma, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Suspensión de Pagos, interesó la suspensión de la Junta señalada y su sustitución por la tramitación escrita que determina dicha Ley, dándose vista de tal solicitud a los señores Interventores, que informaron favorablemente a la petición formulada por la suspensa, por lo que, por auto de veinte del propio marzo, accediendo a lo solicitado, con suspensión de la Junta señalada para el día veintidós del propio mes, se mandó sustituirla por la tramitación escrita, a que se contraen los artículos 18 y 19 de la Ley de 26 de julio de 1922; se mandó

publicar la suspensión y el acuerdo mediante los correspondientes edictos y se concedió a la suspensa un plazo de cuatro meses para que, dentro del mismo, presentase al Juzgado la proposición de convenio con la adhesión de los acreedores, obtenida en forma auténtica, y observándose las formalidades que determina el artículo 19 de la expresada Ley;

Resultando que la proposición de convenio, presentada por los acreedores de la suspensa A. Y. A. C. S. A. don Luis Soler-Roig Jané, que gira comercialmente como «Dytram»; don Joaquín Benet Derch, conocido comercialmente como «Manufacturas Kriptón», y don Teodoro Pérez Andrés, y aceptada por la suspensa, es la siguiente:

«Pactos.—Primero. A. Y. A. C. S. A. pagará el importe del pasivo que se comprende en la lista definitiva de acreedores que en su día formularon los señores Interventores judiciales en el expediente de suspensión de pagos, en la forma siguiente:

Diez por ciento, a los seis meses.

Diez por ciento, a los doce meses.

Quince por ciento, a los dieciocho meses.

Quince por ciento a los veinticuatro meses.

Y el restante, cincuenta por ciento, dentro del tercer año.

Tales plazos empezarán a contar desde la fecha en que gane firmeza el auto que apruebe el presente convenio y dé por concluido el expediente de suspensión de pagos.

Segundo.—Para la debida ejecución del convenio propuesto, se nombra al efecto una Comisión de acreedores, la cual gozará de las facultades que más adelante se señalarán.

Tercero.—La citada Comisión se compondrá de cinco miembros, de los cuales cuatro serán designados por la Sociedad deudora y ostentarán su representación.

Las personas jurídicas que integran la Comisión se harán representar en el seno de la misma por persona física mediante simple carta de mandato.

Cuarto.—Los acreedores designan como miembros de la Comisión a «Electricidad y Refrigeración, S. A.»; «Contardo Española, S. A.»; don Rafael Lozano Collantes y «Banco Ibérico, S. A.»

A. Y. A. C. S. A. designará, por carta dirigida a la Comisión la persona que haya de representarla.

Quinto.—La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría de votos. Cada miembro de la Comisión tendrá un voto.

Sexto.—La Comisión se reunirá cuando lo estime conveniente y siempre a petición de uno cualquiera de sus componentes o de la suspensa.

En la primera de las reuniones se designarán Presidente y Secretario, recayendo la presidencia precisamente en uno de los miembros que representen el grupo de acreedores-proveedores.

El Paesidente presidirá las reuniones y el Secretario levantará acta de las mismas.

Las convocatorias se efectuarán por el Secretario mediante carta certificada con acuse de recibo, con ocho días, por lo menos, de antelación.

No será precisa citación alguna si hubiere quedado convocada la Comisión en la anterior reunión, salvo para los que

no asistieron, y será válida la reunión, aun sin convocatoria escrita alguna, cuando estén presentes o representados todos sus miembros.

Séptimo.—Los miembros de la Comisión sólo podrán delegar su representación en cualquiera de los otros miembros de la Comisión precisamente.

Octavo.—De cada sesión de la Comisión se levantará un acta, que firmarán todos los asistentes, en donde se consignarán en forma clara los acuerdos adoptados y el número de votos afirmativos, y si se solicitasen, los negativos.

Noveno.—La Comisión actuará como mandataria de todos los acreedores y de la propia Entidad deudora.

Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que gane firmeza este Convenio, A. Y. A. C. S. A. otorgará poder irrevocable, como derivado de convenio, a favor de la Comisión de acreedores, con las más amplias facultades de enajenación, disposición y gravamen de todos sus bienes, según minuta que por la Comisión le sea presentada.

Décimo.—La Comisión gozará de las facultades que a continuación se reseñan:

a) Observar y controlar la marcha económica de la Sociedad y estudiar la posibilidad de liquidación del pasivo de la misma.

b) Autorizar el pago, con cargo a la Caja social, de las costas ocasionadas por el expediente de suspensión de pagos.

c) Autorizar el pago de los créditos preferentes, recogidos en la lista definitiva de acreedores, así como contribuciones, impuestos, arbitrios, etc., que se devenguen o se hubieran devengado.

d) Autorizar a los acreedores que facilitasen préstamos, créditos, consignaciones de mercancías, descuento de letras o depósito de materiales a la Compañía deudora para que puedan efectuar sobre el monto de sus operaciones una bonificación del diez por ciento, que se imputará a pago de sus créditos respectivos, sin perjuicio de los plazos previstos para extinción de los mismos.

e) Enjuiciar y observar la marcha económica de la Sociedad, en vista al cumplimiento del Convenio

f) En general, queda facultada para —si así lo acuerda la Comisión expresamente y lo comunica a la Entidad deudora por escrito—dirigir los negocios de A. Y. A. C. S. A., con facultades similares a las que legalmente se confieren al Consejo de Administración.

g) La Comisión podrá designar a una persona física, sea o no miembro de la Comisión, que ostentará el carácter de Delegado de la misma, con el fin de inspeccionar de forma continua la marcha económica de la Sociedad, informando a la Comisión periódicamente.

h) La Comisión podrá designar al Delegado con dos caracteres: el uno, puramente de control económico de la Sociedad, sin más función dentro de la misma; el otro, en calidad de co-Gerente de la Entidad, con idénticas facultades que el Gerente. Cuando la Comisión designe el Delegado para ejercer el cargo de co-Gerente, comunicará su nombramiento a A. Y. A. C. S. A., la cual otorgará inmediatamente la pertinente escritura pública, en virtud de la cual el Gerente y el co-Gerente ostentarán, a partir de aquel momento, la firma mancomunada en la representación, gestión

y administración de la Sociedad, sin que desde aquel momento pueda actuar el Gerente solidariamente.

El pago de los emolumentos del co-Gerente correrán a cargo de la suspensa, A. Y. A. C. S. A.

Undécimo.—La Comisión pasará a ser liquidadora, previo acuerdo, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que la marcha económica y comercial de A. Y. A. C. S. A. no permita sufragar sus propios gastos.

2.ª Cuando no se cumpla lo acordado en el presente Convenio.

3.ª La Comisión, además de las misiones ya especificadas, estudiados los resultados de la Empresa y su rentabilidad, propondrá, si lo estimare conveniente, su disolución a la deudora, y ésta deberá tomar acuerdo en este sentido, designando liquidadores precisamente a los miembros de la Comisión. En este caso la Comisión participará en un tres por ciento del producto que se obtenga.

Duodécimo.—Supuesto llegado el caso de liquidación, la Comisión constituida para tal cargo dictará las normas de realización del activo y facultará a los miembros ejecutivos que tenga a bien designar, señalando las bases, formas y condiciones a tenor de los siguientes extremos:

a) La liquidación deberá efectuarse en un período de un año máximo, a ser posible.

b) Del efectivo que consiga se hará frente, en primer lugar, a los créditos preferentes si los hubiere, y en segundo lugar, a los créditos comunes hasta donde alcancen.

c) Si del caudal conseguido en la citada liquidación no se cubriese la totalidad del pasivo existente en aquel momento en A. Y. A. C. S. A., se liquidará por el orden establecido hasta donde alcance. Si, por el contrario, existiere sobrante, éste será entregado a la Entidad deudora.

Decimotercero.—Quedan a salvo las acciones contra terceros que puedan ejercitar o tener los acreedores, sin que la aceptación de este convenio presuponga novación o transacción de las mismas.

Decimocuarto.—La Comisión de acreedores empezará sus funciones en el día en que quede firme el presente Convenio, y finalizará de ellas cuando haya sido saldada la totalidad del pasivo o haya quedado liquidado totalmente el activo de la Sociedad.

Decimoquinto.—Cualquier duda o cuestión nacida del presente convenio será resuelta por los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia de cualquier otro fuero y domicilio.

Y en estos términos dejan articulada la presente proposición de Convenio, que firman y rubrican los acreedores que se indican, y a la que podrán adherirse cuantos acreedores deseen hacerlo mediante sucesivas aceptaciones por actos separados.

Barcelona, doce de julio de mil novecientos sesenta y ocho.—Luis Soler Reig. Joaquín Benet.—Teodoro Pérez.»

A cuyo Convenio prestaron su adhesión en forma auténtica, bien ante Notario o ante el Juzgado, un total de acreedores que representan la total cantidad de catorce millones quinientas cuarenta y tres mil ciento cuarenta y ocho pesetas con veintinueve céntimos, cifra que sobrepasa los tres quintos del pasivo exigidos, deducidos los créditos que gozan derecho de abstención;

Resultando que, dado traslado de todo ello a los señores Interventores para que informasen, lo hacen en el escrito que antecede, en el sentido de que se ha obtenido la mayoría necesaria para la aprobación del Convenio referido;

Considerando que en virtud de lo expuesto por los señores Interventores en su informe, atendido que el Convenio de

que se trata no contiene cláusulas contrarias a la Ley, que se ha reunido con exceso la mayoría necesaria a que se refiere el artículo 19 de la Ley de 26 de julio de 1922 y que los votos emitidos lo han sido en forma legal y dentro de plazo, es procedente por todo ello aprobar el Convenio expresado, mandando a los acreedores estar y pasar por el mismo y disponer cuantas otras medidas sean procedentes en derecho;

Vistos el indicado artículo 19 de la Ley de Suspensión de Pagos, sus concordantes y demás disposiciones de general aplicación, el señor don Cesáreo Rodríguez-Aguilera Conde, Magistrado, Juez de Primera Instancia número 8 de esta ciudad, accidentalmente encargado del Juzgado de igual clase número 17 de los de la misma, dijo: Que debía aprobar y aprobaba el Convenio presentado por don Luis Soler-Roig Jané («Dytram»), don Joaquín Benet Derch («Manufacturas Kripton») y don Teodoro Pérez Andrés, acreedores de la suspensa, «Acondicionamiento y Automatización del Clima, S. A.» (A. Y. A. C. S. A.), y aceptado por ésta, que se inserta literalmente en el tercer resultando de esta resolución y que se da aquí en lo menester por reproducido; se manda a los acreedores e interesados a estar y pasar por dicho Convenio; cesen los Interventores nombrados, don Antonio Baró Armengol, don Leandro Martínez Zurita y «Electricidad y Refrigeración, S. A.» (E. R. S. A.), al ganar firmeza el presente auto, al que se dé la debida publicidad, expidiéndose edictos comprensivos del mismo, que se fijen en el sitio público y de costumbre de esta ciudad y se inserten en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de esta provincia y en el «Diario de Barcelona de Avisos y Noticias». Comuníquese por oficio a los demás Juzgados de esta capital y a la Oficina de Reparto de Asuntos Civiles y al señor Registrador Mercantil de esta provincia, para lo cual se expidan los oportunos despachos, y póngase el correspondiente asiento en el Libro-Registro Especial de Suspensiones de Pagos de este Juzgado.

Así por este su auto lo mandó y firma el antedicho señor Juez accidental; doy fe.—C. Rodríguez Aguilera. (Firmado y rubricado.)—Ante mí, Antonio Serrano, Oficial. (Firmado y rubricado.)

Y en cumplimiento de lo ordenado para dar publicidad al auto transcrito, se expide el presente, que firmo en Barcelona a veite de agosto de mil novecientos sesenta y ocho.—El Secretario, Antonio Serrano.—3.052-5.

B A Z A

Don Luis Ramón Martínez Garrido, Juez de Primera Instancia de Baza y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado, a instancia de Ramona Hernández Cifuentes, con beneficios de pobreza, se tramita expediente sobre declaración de fallecimiento de su marido, Juan García Mateos, hijo de Manuel y Agustina, natural de La Carolina (Jaén), vecino últimamente de Baza, de donde se ausentó en 1938, sin que desde entonces se haya sabido nada de él.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Baza, 15 de junio de 1968.—El Juez, Luis Ramón Martínez.—El Secretario.—4.863-E. 1.ª 6-9-1968

MADRID

En virtud de lo acordado por el señor Juez de Instrucción número dieciocho de los de esta capital, en la pieza de responsabilidad civil del sumario que se instruyó con el número 200 de 1962 por imprudencia contra Antonio Robles Martínez y a fin de hacer efectivas las responsabilidades pecuniarias declaradas proce-

dentales, se saca a la venta en pública y primera subasta y tipo de tasación una motocicleta marca Roa, matrícula M-232158, que se encuentra depositada desde el 27 de julio de aquel año en el Parque Móvil de Ministerios Civiles y que fué valorada pericialmente en diez mil pesetas.

Para dicho acto se ha señalado el veinte de septiembre próximo, a las once horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la calle de General Castaños, número 1, advirtiéndose a los licitadores que dicho acto tendrá lugar conforme a las prevenciones de los artículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que serán a cargo del rematante el importe de las estancias devengadas en el Parque Móvil por dicho vehículo.

Dado en Madrid a treinta de agosto de mil novecientos sesenta y ocho.—El Juez. El Secretario.—4.869-E.

*

Don Federico Mariscal de Gante y Pardo-Belmonte, Magistrado-Juez de Primera Instancia número veintidós y accidentalmente del de igual clase número quince de los de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado hoy de mi cargo se tramita expediente bajo el número 251 de 1968 a instancia de doña Felisa Plaza y Díaz-Guerra, mayor de edad, viuda y vecina de Madrid, sobre declaración de fallecimiento de su hijo don Miguel Chicharro Plaza, nacido en Madrid en 28 de octubre de 1917, hijo de Miguel y de Felisa, que tuvo su último domicilio en esta capital, calle de Bravo Murillo, 69, y que se ausentó de dicha domicilio con dirección a Monserrat, en la provincia de Barcelona, en el mes de julio de 1936 para incorporarse al frente, sin que se haya vuelto a tener noticia del mismo.

Dado en Madrid a diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y ocho.—El Juez, Federico Mariscal de Gante.—El Secretario.—3.225-C. 1.ª 6-9-1968

REQUISITORIAS

ANULACIONES

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería deja sin efecto la requisitoria referente al procesado en la causa número 252 de 1967. Luis Alvarez Castillo. — (3.150.)

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid deja sin efecto la requisitoria referente al procesado en el sumario número 62 de 1965, Juan Gabarré Ferreduela. (3.152.)

El Juzgado de Instrucción de Plasencia deja sin efecto la requisitoria referente al inculcado en diligencias previas número 130 de 1968, hoy diligencias preparatorias número 36 de 1968, José Antonio Nistar Cenador.—(3.153.)

EDICTOS

Juzgados civiles

En providencia dictada en el día de hoy por el señor Juez comarcal de esta villa en los autos de juicio verbal de faltas que con el número 19 del año 1968 se siguen en este Juzgado contra Damián Salcedo Lorite, sobre lesiones y daños en accidente de circulación, ha acordado citar al referido denunciado, a fin de que el día 20 de septiembre próximo y hora de las once de su mañana comparezca en la sala audiencia de este Juzgado, sita en calle Mártires, 2, al objeto de asistir a la celebración del juicio acordado, apercibiéndole que de no comparecer le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Lillo a 31 de agosto de 1968.—El Secretario.—(3.151.)